



AGRUPACIÓN DE FAMILIARES DE EJECUTADOS POLÍTICOS

Reunión Continental del CMP- AMERICA y VI Conferencia Continental por la Paz en Republica Dominicana

Intervención de Alicia Lira Matus, Presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos de Chile

A nombre de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos de Chile agradezco la invitación a este encuentro tan importante de organizaciones de distintos países, unidas por la idea común de trabajar y aportar a la paz en nuestra región.

Nuestra agrupación se conformó en el año 1976, en plena dictadura militar, constituida por familiares directos de los asesinados; éramos madres, hermanas, esposas e hijas, todas mujeres, ya que la mayoría de las víctimas en los primeros años fueron hombres. Nos juntamos para solidarizar, acompañarnos en el dolor y para luchar por terminar con la cultura de la muerte que se había instaurado en nuestra patria, para lo cual era necesario recuperar la libertad.

Desde el momento que se produjo el golpe de Estado en Chile, en la mañana del 11 de septiembre de 1973, se arremete contra el pueblo y empieza la política de exterminio por razones políticas. Los primeros ejecutados fueron asesinados en el palacio presidencial La

Moneda y sus alrededores, en los cordones industriales, en los sindicatos o en las calles, luego de haber sido sacados violentamente de sus casas.

Desde principio a fin, la dictadura gobernó ejecutando a sus opositores. Se llenaron estadios, regimientos y cárceles secretas con detenidos y torturados, muchos de los cuales fueron ejecutados. Las fuerzas represivas actuaban con ensañamiento: a los prisioneros políticos se les aplicaba la ley de fuga o eran torturados hasta la muerte, algunos fueron dinamitados, quemados vivos o degollados. En los primeros meses después del golpe la llamada Caravana de la Muerte, encabezada por el general Sergio Arellano Stark, recorrió Chile de norte a sur, seleccionando a prisioneros políticos que eran sometidos a juicios sumarios y ejecutados.

El objetivo era paralizar a los chilenos por el terror. Detener a sangre y fuego el proceso revolucionario del gobierno del Presidente Salvador Allende. No hay que olvidar que éste, a través de medidas estructurales como la reforma agraria y la nacionalización del cobre, había traído mayor justicia social, limitando los privilegios que hasta entonces habían tenido empresas extranjeras, los terratenientes y grandes empresarios chilenos. Fueron precisamente estos sectores los que organizaron y apoyaron el golpe de Estado, imponiendo luego el sistema económico neoliberal con toda su secuela de injusticias que perduran hasta hoy.

Para la Agrupación las tareas centrales han sido la búsqueda de la verdad, de la justicia y la reparación para las víctimas del terrorismo de Estado en Chile. Es esto lo que también nos



AGRUPACIÓN DE FAMILIARES DE EJECUTADOS POLÍTICOS

motiva a participar en este encuentro, ya que permanentemente nuestra lucha ha estado unida a la lucha por la paz en nuestros países.

En nuestro país a más 3000 chilenos y chilenas se le desapareció y ejecuto por razones políticas, entre ellos eran niños y niñas. Ellos son las víctimas reconocidas en el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Y más de 1.000 hombres y mujeres asesinados que no fueron calificados por esta Comisión.

Al restablecerse la democracia, los familiares de ejecutados políticos hemos participado de las diferentes iniciativas para lograr que se estableciera la verdad y se hiciera justicia, como único camino para remover y transformar el andamiaje jurídico, institucional y cultural creado por la dictadura.

Sin embargo, durante los 23 años de gobiernos democráticos no ha existido la voluntad política para crear los mecanismos políticos y jurídicos que permitieran establecer la verdad plena y hacer realmente justicia a las víctimas del terrorismo de Estado. Lo que ha prevalecido ha sido el compromiso de impunidad para los violadores de derechos humanos, sellado entre las Fuerzas Armadas, la derecha política que sustentaba la dictadura y la Concertación de Partidos por la Democracia, previo al fin del régimen de facto.

Así, aunque el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación tuvo el importante mérito de haber reconocido oficialmente los crímenes cometidos, dignificando de este modo a las víctimas, tiene la grave falencia de no consignar los nombres de los victimarios, ni siquiera en aquellos casos en que estaban plenamente identificados, asegurándoles no sólo una impunidad jurídica sino también social y moral.

Permanentemente se ha escamoteado la justicia y se ha tratado de relativizar **la necesidad histórica de verdad y justicia**. Se ha hecho tristemente célebre la frase de Patricio Aylwin, el primer Presidente post dictadura, quien ofreció justicia sólo “en la medida de lo posible”. Justicia relativizada y ligada al concepto mal entendido de “reconciliación” nacional, que presuponía nuestra disposición a perdonar, a pesar de que nunca un victimario de nuestros familiares se ha arrepentido ni pedido perdón.

Todas las iniciativas gubernamentales en esta materia han estado orientadas a garantizar la impunidad a través de medidas como proyectos de ley de amnistía, acuerdos extrajudiciales, mesas de diálogo, rebajas de penas o proyectos de indulto para los victimarios. Por su parte, el Consejo de Defensa del Estado es una instancia que hasta hoy defiende y justifica jurídicamente los crímenes de lesa humanidad cometidos por los agentes del Estado pinochetista, para negar a las víctimas y sus familiares la justa reparación económica a que tienen derecho de acuerdo a la normativa internacional.

Debemos decir, creo que con justo orgullo, que ninguna de las iniciativas de impunidad total ha podido prosperar, gracias, por una parte, a la permanente movilización de la Agrupaciones de Familiares, Agrupaciones de víctimas, y hemos contado con el apoyo de organismos de derechos humanos, y, por otra parte, al incansable y tenaz trabajo de los abogados de derechos humanos.



AGRUPACIÓN DE FAMILIARES DE EJECUTADOS POLÍTICOS

Además, hemos tenido el apoyo de instancias internacionales como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos, las que han condenado y mandatado al Estado de Chile que cumpla los convenios internacionales y acabe con la impunidad.

De este modo, se ha logrado someter a proceso a una cantidad considerable de violadores de derechos humanos. Pero el inicio de las querellas no nos ha garantizado el acceso a la justicia, ya que se comenzaron a utilizar figuras como la media prescripción y otras argucias legales destinadas a aminorar las penas y dejar en libertad a los responsables. Se reiteró la clara intención de favorecer a los victimarios, tratando de desperfilar la magnitud de los crímenes e imponiendo el olvido y la impunidad, en vez de trabajar por la verdad plena y la justicia.

Puedo señalar que el número de encausados desde el año 2000 en procesos de derechos humanos en calidad de procesados, imputados o condenados ronda las 800 personas, de quienes un tercio tiene por lo menos una condena definitiva en su contra. Alrededor de 70 individuos se encuentran, o deben encontrarse, cumpliendo penas de cárcel por dichos crímenes, seis de ellos en prisión preventiva. 13 represores más ya han sido liberados por

beneficios (10) o por haber cumplido la totalidad de su sentencia y 177 están con pena remitida, o sea, su condena por crímenes de lesa humanidad ha sido tan baja que están en libertad sin haber pasado ni un solo día en la cárcel.

Hasta el año 2008 había 1.164 casos de víctimas de ejecución política por las que nunca se habían presentado querellas, no lo habían hecho los familiares y menos el Estado, lo que significa que en todos esos casos no había investigación alguna y tampoco se habían establecido responsabilidades. Por este motivo y como un acto de justicia hacia las víctimas, en el mismo año, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos impulsamos la campaña "Impunidad Jamás", asumiendo la presentación de querellas por cada una de las víctimas y con un grupo de abogados a la cabeza del compañero Eduardo Contreras Mella, quienes patrocinan en forma totalmente solidaria y comprometida con la causa de la defensa de los derechos humanos

Es importante siempre que queden consignados *quiénes* son los responsables, partiendo por los personeros del Estado dictatorial que dio la orden de torturar, asesinar y hacer desaparecer a las personas por sus ideas políticas, pero también llegar a los cómplices civiles de la dictadura, como Alberto Cardemil, Jovino Novoa ex ministros del dictador Pinochet, para establecer la verdad plena y que se haga justicia, es nuestro objetivo, no sólo porque es la base de la reparación a las miles de familias chilenas afectadas, sino porque es el único camino para construir una democracia estable.

Nuestro trabajo durante casi 40 años en Chile ha sido luchar por establecer verdad, justicia y memoria en relación con las víctimas de la dictadura. Pero también estamos exigiendo verdad y justicia en los crímenes que se ha cometido en estos 23 años de gobiernos democráticos, ya que tenemos una larga lista de jóvenes asesinados por carabineros de Chile, la policía armada, 12 de ellos son jóvenes comuneros mapuches; incluso tenemos el



AGRUPACIÓN DE FAMILIARES DE EJECUTADOS POLÍTICOS

caso de un joven mapuche de 16 años, José Huenante, que fue detenido y hecho desaparecer en el año 2005 por Carabineros en la ciudad de Puerto Montt, sin que hasta el día de hoy se sepa cuál fue su destino.

Por eso decimos que **mientras no exista verdad y justicia, no lograremos el nunca más en Chile y los crímenes se volverán a repetir.**

En concordancia con toda nuestra historia en defensa de la vida y la libertad, nuestra Agrupación se sumó a los “**Observadores de la Escuela de las Américas**”, organización que trabaja por el cierre de esa nefasta institución instructora de muerte y tortura, que desde el año 1946 instruye a militares de países latinoamericanos.

Desde hace seis años que trabajamos en forma constante exigiendo que los gobiernos chilenos no envíen más militares a esta escuela de muerte, porque sabemos por nuestra historia reciente que en esa “escuela” fueron formados los peores verdugos de la policía política de Pinochet, la DINA, de los cuales varios hoy se encuentran presos en las cárceles especiales (tipo hotel), como el siniestro ex general Manuel Contreras, condenado a más de 100 años de cárcel por sus múltiples crímenes.

Nuestro lema es “Cerremos la Escuela de las Américas”

La Escuela de las Américas, que es operada por el Ejército de los Estados Unidos, fue fundada en 1946 en Panamá con el objetivo de entrenar a soldados latinoamericanos en técnicas de guerra y contrainsurgencia, es decir, para aplicar la llamada *doctrina de seguridad nacional* impidiendo cualquier proceso revolucionario y asegurando que nuestros países continúen siendo el patio trasero del imperio.



De Panamá fue trasladada años más tarde a Fort Benning, en Georgia, EE.UU. La Escuela de las Américas es el más conocido de los centros estadounidenses de instrucción militar, pero según datos de Amnistía Internacional hay más de 150 centros en Estados Unidos y en otros países donde se imparte formación a militares extranjeros.

En 1996, la prensa norteamericana dio a conocer datos según los cuales, entre 1982 y 1991, la Escuela había utilizado unos “manuales de instrucción sobre técnicas de inteligencia”, que propugnaban las ejecuciones, la tortura, las palizas y el chantaje. Amnistía Internacional ha denunciado que los manuales, redactados en español, se emplearon para capacitar a miles de agentes de las fuerzas de seguridad latinoamericanas y se distribuyeron ejemplares en Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Perú.



AGRUPACIÓN DE FAMILIARES DE EJECUTADOS POLÍTICOS

En 1991, en una demanda civil, un tribunal de justicia de EE.UU. declaró al ex ministro de Defensa guatemalteco, general Héctor Gramajo, responsable del secuestro y la violación de la ciudadana estadounidense hermana Ortiz. El general Gramajo es uno de los cientos de graduados de la tristemente célebre Escuela de las Américas.

Por sus aulas han pasado más de 67.000 soldados de América Latina, muchos de los cuales han sido destacados violadores de los derechos humanos en sus propios países, pues fueron entrenados para combatir a quienes por luchar por mayor justicia social son considerados “enemigos de la patria” .

Cientos de miles de latinoamericanos fueron torturados, asesinados, hechos desaparecer por soldados y oficiales entrenados en la Escuela de las Américas en países como Chile, Guatemala, Argentina, Perú, Uruguay, Nicaragua, El Salvador, México, Honduras, entre otros. En Chile los más sanguinarios oficiales del régimen de Pinochet como Manuel Contreras, Álvaro Corbalán, Miguel Krassnoff y Pedro Espinoza fueron entrenados en esa academia militar.

En los últimos años, graduados de la Escuela de las Américas han participado en asesinatos en Colombia; han sido parte del grupo narcotraficante Los Zetas en México; y han estado involucrados en el golpe de Estado en Honduras el año 2009.

Desde enero del 2001 la Escuela de las Américas fue rebautizada como Instituto de Cooperación y Seguridad del Hemisferio Occidental (WHINSEC en inglés).

Los países con gobiernos más progresistas, como Argentina, Venezuela, Bolivia, Uruguay, Ecuador y Nicaragua han dejado de enviar militares a la Escuela de las Américas.

Sin embargo, los gobiernos de muchos otros países lo siguen haciendo. Según datos correspondientes al año 2011, Brasil envió 21 militares; Colombia: 512; Costa Rica: 36; Chile: 142; República Dominicana: 37; El Salvador: 58; Guatemala: 10; Honduras: 96; México: 16; Panamá: 54 y Paraguay: 15.

Trabajar por la paz, es trabajar por la vida y la felicidad del hombre y la mujer, es ir contra la injusticia, por ello estamos contra toda forma de intromisión del imperialismo estadounidense en los países de nuestro continente sin respetar la soberanía de los pueblos. Rechazamos la instalación de bases militares en nuestros países, como ha sucedido recientemente en Chile, donde se instaló una base militar en la ciudad de Con-Con, Región de Valparaíso, en el “Fuerte Aguayo”, En esta política militar del imperio norteamericano, llegó a instalarse esta base militar en nuestro país, bajo el gobierno de derecha Sebastián Piñera, lo cual a las organizaciones de derechos humanos nos movilizamos y denunciarnos en reiterada veces este grave hecho.

Cuando el 5 de abril 2012 el “Centro de Entrenamiento para Operaciones de la Paz en Zonas Urbanas” construido en el Fuerte Aguayo de Con Con en nuestro país.



AGRUPACIÓN DE FAMILIARES DE EJECUTADOS POLÍTICOS

Este emplazamiento militar, que imita una zona urbana con 8 modelos de edificios y tuvo un costo de 500.000 dólares, fue construido con el aporte proporcionado por el COMANDO SUR. “Este es el primer proyecto de su tipo que se levanta en Chile para apoyar la capacitación de personal encargado de ejecutar operaciones de mantención de la paz o de estabilidad civil”. Esta es la respuesta de la preocupación del gobierno y los EEUU, las masivas crecientes movilizaciones se han mantenido por más de un año en demanda de las diferentes demandas sociales en especial los estudiantes en diferentes ciudades de nuestra patria.

la gravedad, de acuerdo al libro “Territorios Vigilados”, de Telma Luzzani, actualmente operan 72 bases militares de EEUU en América Latina y el Caribe.

Dentro de las bases de EEUU, que existen en nuestro continente, figuran de República Dominicana, la Base Militar de la Isla Saona, y de Chile, la Base Militar del Fuerte Aguayo en Con-Con.

“En las bases militares extranjeras se encarna simbólicamente la política de guerra, dominación y saqueo de los bienes naturales de nuestros pueblos. Por eso es tan importante sumar nuestro esfuerzo militante, junto a numerosas organizaciones sociales y políticas de la región, para llevar adelante la Campaña Continental por una América Latina de Paz ¡Fuera las bases militares extranjeras!”, concluye.

Compartimos el llamado de Amnistía Internacional y otras organizaciones de defensa de los derechos humanos a poner fin al comercio de material para torturar, porque los torturadores no nacen, sino que se hacen y se entrenan. Del mismo modo, debe ponerse fin al comercio de armas, propugnando la solución de los conflictos por vías políticas y diplomáticas.

La falta de justicia en nuestro país, permite que hoy, militares del ejército golpista, como los Ex Comandante en jefes del ejército como Oscar Izurieta, sea hoy subsecretario del Ministerio de defensa, y Juan Emilio Cheyre presidente del registro electoral. (Serval), registro electoral que ellos como parte de la dictadura, destruyeron y quemaron, por lo cual recién en año 1990 se pudo reconstruir los padrones electorales.

Por eso fundamental que la base de todo proceso democrático tiene que estar en la búsqueda de la verdad para hacer justicia, y reforzar en especial la educación sobre los derechos humanos, porque sólo en la medida que se comprenda y respete la dignidad de todo ser humano, en la medida que haya justicia social, se podrá poner fin a todo tipo de violencia y construir la paz entre sociedades solidarias.

Verdad, Justicia y Memoria

Carabineros de Chile 33 – Fono-Fax: 665 9459 – Santiago de Chile www.afepchile.cl –

E-Mail: afepchile@yahoo.es



AGRUPACIÓN DE FAMILIARES DE EJECUTADOS POLÍTICOS

